JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL
Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

RAD: 110014003046-2018-01208-00

Teniendo en cuenta lo manifestado por el apoderado judicial del extremo ejecutante, donde solicita dar por terminado el proceso con ocasión al pago total de la obligación, este Despacho en aplicación de las disposiciones consagradas en el artículo 461 del C.G.P.,

RESUELVE

PRIMERO: Decretar la terminación del presente proceso por pago total de la obligación.

SEGUNDO: Ordénese el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. OFÍCIESE a quien corresponda. Si hubiere embargos de remanentes, la Secretaría proceda de conformidad.

TERCERO: Efectúese el desglose de los títulos aportados como base de la ejecución a favor de la parte demandada y con las constancias del caso.

CUARTO: Sin costas para las partes.

QUINTO: Cumplido todo lo anterior, archívense las presentes diligencias.

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS
Juez

APB

Firmado Por:
Jorge Eliecer Ochoa Rojas
Juez
Juzgado Municipal
Civil 046
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2ecccbf8bb00161de916a79920d5a3362b11b5ff27f13c797c1a6812781dc075**

Documento generado en 16/02/2024 09:46:09 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

RAD: 110014003046-2018-01208-00.

Surtido el trámite propio de esta clase de actuaciones se procede a resolver el INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS, promovido por el abogado LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA, en contra de su poderdante DUBIAN FERNANDO ZULUAGA LÓPEZ, soportado en el inciso 2 del artículo 76, el artículo 129 y subsiguientes del Código General del Proceso.

ANTECEDENTES

El abogado Luis Alejandro Hernández Medina presenta el incidente de regulación de honorarios contra su cliente Dubian Fernando Zuluaga López. En el que reclama el pago de honorarios equivalentes al 25% del capital de \$70.000.00, recaudado, esto es la suma de \$17.500.000, basado en un contrato verbal de prestación de servicios tras relevársele como apoderado del demandante; por lo anterior solicita que se regulen los honorarios, se conmine al pago al incidentado y, de no efectuarse, ordene el embargo de dinero para cubrir los honorarios.

Al incidente de regulación de honorarios, se le dio inicio a través del auto de fecha 17 de febrero de 2022, corriéndose el traslado respectivo a la parte incidentada, la cual guardo silencio.

Tramitado en legal forma, se decretó como prueba dictamen Pericial el cual fue aportado en oportunidad y del cual se corrió traslado respectivo a la parte incidentada dentro del cual guardo silencio; y las pruebas documentales aportadas que hacen parte integral del proceso de la referencia.

Por no haber más pruebas que el despacho considere pertinentes practicar, se procede a resolver el incidente propuesto, fundado en las siguientes,

CONSIDERACIONES

En el caso objeto de estudio y que se pretende, es la regulación de honorarios, que comprende la controversia sobre el reconocimiento pecuniario del servicio prestado estipulado en un contrato de mandato, estableciéndose este trámite para regular la contraprestación del apoderado cuya gestión termina en la actuación procesal, de modo que el profesional del derecho que concluye su labor por revocatoria del poder, puede solicitarle al juez mediante un incidente que liquide sus honorarios considerando, simplemente la labor realizada.

Para establecer los requisitos y trámite debemos remitirnos a las disposiciones contenidas en el inciso 2 del artículo 76 del C.G.P. Conforme a la norma en mención se puede concluir que, para dar trámite al incidente de regulación de honorarios se requiere: 1) Que quien lo adelante sea abogado reconocido dentro del proceso como apoderado de alguna de las partes o demás intervinientes, su cónyuge o herederos en caso de que éste haya fallecido, 2) Su mandato haya sido revocado expresa o tácitamente, donde el primero hace referencia a la voluntad del poderdante expresada mediante memorial, y la segunda, por otorgamiento de un nuevo mandato, cuya procedencia además, está supeditada a la aceptación de la

revocación, o el reconocimiento de personería adjetiva al nuevo apoderado(a), y 3) Que el mismo sea presentado dentro de los (30) días siguientes a la notificación del auto que acepta la revocación del poder o el que reconoce personería adjetiva al nuevo apoderado(a).

Es pertinente indicar que no es materia de un incidente como el que aquí se resuelve, no busca tratar aspectos relacionados con las causas que determinaron la terminación del mandato y la consecuente revocatoria del poder. El objeto del presente trámite accesorio, recuérdese, es establecer el valor de los honorarios a reconocer al apoderado a quien se le terminó unilateralmente su mandato, por concepto de la gestión desplegada por él dentro del proceso.

En el sub-lite, los extremos intervinientes en este incidente solicitaron la práctica de pruebas y según da cuenta el informe pericial practicado, se tiene que las diligencias realizadas por el abogado hasta la fecha de revocatoria del poder incluyeron la presentación de la demanda, solicitud de embargo y secuestro de un inmueble, y se llegó hasta el 70% de la actuación ejecutiva por lo que, la fijación de honorarios en principio debe ceñirse estrictamente a lo actuado.

En este punto tenemos, como dispone la norma, del auto que reconoció personería la apoderada MARIMELBA AGUDELO ROMERO taxativamente se aceptó la revocatoria de poder que hace demanda a su apoderado puesto que con la presentación de un nuevo poder se revoca el anterior (Art. 69 C.P.C.) y que el incidente se presentó en oportunidad como exige la norma.

Puestas en contexto las anteriores consideraciones, es del caso proceder a emitir pronunciamiento de fondo del presente trámite, para lo cual teniendo en cuenta el material probatorio que se arrimó al incidente para establecer el monto de los honorarios del incidentalista, para tal fin se aportó dictamen pericial que da cuenta de la labor realizada y no queda más que fijar dichos honorarios en un monto de conformidad a lo dispuesto en la tabla de honorarios confeccionada por el colegio de abogados, haciendo claridad que, al despacho solo le corresponde fijar los honorarios en una proporción con la gestión realizada por el profesional del derecho.

Entonces, para fijar dichos honorarios en un monto de conformidad con lo dispuesto en la respectiva tabla de tarifas de honorarios, encontramos que las partes pueden acordar hasta el 50% de las pretensiones cuando el poderdante solo firma el poder y los demás gastos corren por cuenta del abogado. Sin embargo, atendiendo lo expuesto en el dictamen pericial aportado, que da cuenta de las diligencias realizadas por el abogado hasta la fecha de revocatoria del poder, el cual propone que se le paguen honorarios equivalentes al 55% del valor de lo pretendido, que asciende a la suma \$9.625.000., este despacho considera que hay lugar a reconocer al actor de este incidente el referido valor, por cuanto el mismo se encuentra ajustada a derecho, y no fue objetado.

Así, se fijarán los honorarios a favor del abogado LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA por la suma de nueve millones seiscientos veinticinco mil pesos (\$\$9.625.000), habida cuenta que DUBIAN FERNANDO ZULUAGA LÓPEZ, le revocó el poder que le había otorgado, como quedó anotado; Así mismo habrá de negarse la solicitud de medidas cautelares, teniendo en cuenta que esta no es la oportunidad procesal para decretar las mismas.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado 46 Civil Municipal de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. RECONOCER a favor del abogado Dr. LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA la suma de nueve millones seiscientos veinticinco mil pesos (\$\$9.625.000) como honorarios por concepto de la gestión desplegada por este profesional dentro de este proceso. la cual debe ser cancelada por incidentado DUBIAN FERNANDO ZULUAGA LÓPEZ conforme a lo manifestado en esta providencia.

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS

Juez

APB

Firmado Por:

Jorge Eliecer Ochoa Rojas

Juez

Juzgado Municipal

Civil 046

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **11af8c9a563bfd11085ef8ad889f0d68d1ae5ed60fef87f3b35ec6ae7845affb**

Documento generado en 16/02/2024 09:46:04 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

RAD: 110014003046-2019-00064-00.

Como quiera que el Despacho en proveído de esta misma data, se pronunció respecto al recurso de reposición incoado, es pertinente emitir pronunciamiento sobre las actuaciones surtidas en el presente trámite.

El primer punto del disentimiento tengan en cuenta la partes, atendiendo la censura planteada, que la persona ejecutada y a la que se refiere la demanda es Cruz Olinda Quiñones de Soto, y si bien esta se identificó erróneamente con la cédula No 41.312.345 en el escrito de demanda, a este despacho no le caben dudas que es la persona demandada dentro del presente trámite por cuanto su nombre se encuentra registrado como propietaria del 50% como consta en la anotación No 035 del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-266547,

Así mismo no hay lugar ordenar la corrección del auto que libro mandamiento de pago, pues en él se indicó claramente el nombre de la demanda y nada se dijo sobre el número de la cedula de ciudadana de las partes.

Ante esas inconsistencias, no hay trascendencia sustancial para declarar la nulidad de lo aquí actuado, como quiera que con el número de cédula de la ejecutada, que pese a indicarse erróneamente el escrito de la demanda, si corresponde a la notificada y a la propietaria del bien inmueble que adeuda las cuotas de administración ejecutadas en este asunto, no queda duda que se trata de la misma persona, al coincidir el número de la cédula indicado al registrado en el certificado de matrícula de inmobiliaria.

En cuanto al segundo punto, relativo a auto del 29 de abril de 2023, se indicó que atendiendo al informe secretarial que da cuenta que el término de la notificación se surtió en silencio, se encontró la Litis y era pertinente correr traslado de la contestación de la demanda que trata el numeral 1 del artículo 443 del C.G.P., dando por sentado que la notificación surtida era pertinente continuar con la siguiente etapa procesal.

Ahora bien, toda vez que resulta procedente y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 286 del C.G.P., se corrige el auto del 29 de abril de 2023, en la medida que se omitió indicar sobre la notificación surtida a la demandada Cruz Olinda Quiñones de Soto, en este sentido se precisa el referido auto indicando que la parte demandada, se notificó del auto que libra orden de pago, conforme lo prevé los artículos 291 y 292 del C.G.P. (Fl 021-034) del expediente electrónico, quien dentro del término legal no propuso excepciones,

Pese a lo esgrimido, y toda vez que la fecha que se encontraba programada no se llevó a cabo en atención al recurso, se procede a reprogramar la audiencia de que trata el

artículo 372 del C.G.P., para el día 3 DE ABRIL DE 2024 A LA HORA DE LAS 8:30 A.M. Se aclara a las partes que en principio tal audiencia se hará en forma presencial, la cual no estará sujeta a reprogramación con el fin de cumplir con el término que trata el artículo 121 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS

Juez

APB

Firmado Por:

Jorge Eliecer Ochoa Rojas

Juez

Juzgado Municipal

Civil 046

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1fe139057dc1ac76e459351cfbe1e1d4ea4f9fd392f26c91e491e0a538c08e1e**

Documento generado en 16/02/2024 09:46:08 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

RAD: 110014003046-2019-00064-00.

Agréguense a los autos, la respuesta del requerimiento efectuado por el demandante, la misma se pone en conocimiento de la parte demandada.

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS

Juez (2)

APB

Firmado Por:

Jorge Eliecer Ochoa Rojas

Juez

Juzgado Municipal

Civil 046

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **43639f647d3e0825bfb5844422c1f20417ad14a751f0d114ff76f9903ac5307b**

Documento generado en 16/02/2024 09:46:05 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Procede el Despacho a decidir el recurso de reposición propuesta por el apoderado del demandado GABRIEL EDUARDO SOTO QUIÑONES, contra el auto de fecha 29 de abril de 2023, mediante el cual se integró el contradictorio y se ordenó correr traslado conforme al artículo 443 del C.G.P. de la contestación de la demanda.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Aduce el apoderado de la parte demandada, que la propietaria registrada del inmueble en cuestión es Cruz Olinda Quiñones de Soto, pero esta se identifica con cédula No 27.584.426 y no con la cédula No 41.312.345 ante lo cual aduce que es necesario corregir este error para proceder adecuadamente con el trámite subsiguiente. Por lo anterior solicita se revoque el auto de fecha 29 de abril de 2023.

Surtido el traslado a la parte contraria, esta solicitó no escuchar la suplicas del recurrente, como quiera que, el abogado Mario Camilo Sánchez Chauta carece del poder necesario para representar a Olinda Quiñones Cruz en la demanda, ya que el único poder existente es el otorgado por Gabriel Eduardo Soto. Así mismo destaca que el despacho no se ha pronunciado sobre la notificación de la demanda y que respecto al referido error en el número de la cédula de identidad, es subsane por lo que la solicitud principal consiste en que el juez niegue el recurso por su improcedencia y corrija la cédula para posibilitar una notificación adecuada.

CONSIDERACIONES

La reposición es un instrumento que tienen las partes y los terceros habilitados para intervenir dentro de un proceso para restablecer la normalidad jurídica cuando consideren que ésta fue alterada, por fallas en la aplicación de normas sustanciales o procesales o por inobservancia de las mismas. (Artículo 318 del Código General del Proceso).

El primer punto del recurso de reposición tiene que ver en cuanto el recurrente no está legitimado a presentar recurso alguno cuando actúa solo como apoderado de una de las partes demandadas, argumento que no es recaudo para esta sede judicial ya que la norma procesal respalda la capacidad de las partes involucradas para presentar recursos en cualquier etapa del proceso.

Ahora bien, en lo que respecta al referido auto, advierte el despacho, que el recurso de reposición como medio de impugnación procede únicamente contra el auto que dicte el juez a fin de que los revoque o reforme de conformidad y ha de interponerse con expresión de las razones que lo sustenten con lo normado en el Artículo 318 del C. G. del P., y frente a las manifestaciones señaladas por el apoderado recurrente, desde ya se advierte que ninguna trascendencia sustancial tiene para revocar el auto objeto de censura toda vez que únicamente versa sobre que se indicó erróneamente en el escrito de la demanda número de cédula de la ejecutada, y no sobre una yerro dentro del referido auto.

En síntesis, de lo anterior y como la parte no ha demostrado las falencias de la decisión, sin que sea admisible ir más allá del objeto propio de este mecanismo procesal, y lo aquí cuestionado es un aspecto netamente procesal, referente a las actuaciones surtidas dentro del presente trámite y no sobre el auto en cuestión, el auto recurrido habrá de mantenerse en todas y cada una de partes, por ende, este Despacho,

RESUELVE:

1. **MANTENER** incólume el auto objeto de reposición en atención a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS
Juez

APB

Firmado Por:
Jorge Eliecer Ochoa Rojas
Juez
Juzgado Municipal
Civil 046
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a63f3b7562215e1045eb0ad59f6a68baf7b6fee0c238c655081459a02d320f66**

Documento generado en 16/02/2024 09:46:06 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del Diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

RAD: 110014003046 2020-00106-00.

Estando el proceso al Despacho y, revisado las documentales obrantes dentro del expediente digital de la referencia, se releva del cargo de liquidador a RODOLFO ANDRES YAÑEZ OTALORA, por cuanto no se ha pronunciado respecto de la designación realizada por esta Sede Judicial en auto que antecede. En consecuencia, se designa para tal efecto a quien aparece en el acta adjunta a este proveído, de la lista de auxiliares de la justicia creada por la Superintendencia de Sociedades como liquidador (a) del patrimonio del solicitante.

Notifíquesele su designación por el medio más expedito para que tome posesión del cargo encomendado informándole que debe dar cumplimiento a la orden impartida en auto que dio apertura al presente trámite de liquidación, en el que además se dispuso sobre los honorarios provisionales.

Téngase como acreedor a la SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ, en consecuencia, se reconoce personería al abogado JAIME ANDRÉS QUINTERO SÁNCHEZ, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Una vez surtido el trámite de notificación de la apertura de la liquidación de la referencia, se dará cumplimiento a lo previsto en el inciso segundo del artículo 566 del C.G.P.

De otra parte, se reconoce personería judicial para actuar a la abogada PIEDAD PIEDRAHITA RAMOS como apoderada del acreedor BANCO DE BOGOTA S.A., en los términos y para los efectos del poder conferido.

Por ser procedente, ofíciase al Juzgado Treinta Y Uno (31) De Pequeñas Causas Y Competencia Múltiple De Bogotá D.C, a fin de que cumpla con lo previsto en el numeral 7° del artículo 565 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS

Juez (2)

Firmado Por:
Jorge Eliecer Ochoa Rojas
Juez
Juzgado Municipal
Civil 046
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ad72e2605602759e267596d9e4c14ff10386a9713e994983638894f43e215364**

Documento generado en 16/02/2024 03:45:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del Diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

RAD: 1100140030462020-00106-00.

Procede el Despacho a decidir el incidente de nulidad promovido por el apoderado judicial de la acreedora Ángela Patricia López Castellanos, reconocida dentro del proceso de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante de la referencia, con ocasión a la pérdida de competencia prevista en el artículo 121 del Código General del Proceso.

FUNDAMENTOS DEL INCIDENTANTE

Considera el apoderado que, en el presente asunto, debe declararse la pérdida automática de competencia para conocer del presente proceso, conforme lo prevé el artículo 121 del código general del proceso, toda vez que el Despacho recibió la demanda desde el 17 de abril de 2020, se ha nombrado liquidadores que hasta la fecha, no se han posesionado. Además, agrega que desde el momento que se han nombra y, se vuelve a decidir sobre el nombramiento de uno nuevo, transcurre un tiempo razonable, imprimiéndole una mora injustificada al proceso.

Por su parte, el apoderado de la parte actora, al descorrer el traslado correspondiente, indicó que no es dable exigir al Despacho el cumplimiento del término de un año para dictar sentencia, conforme lo previsto en la sentencia C-443 de 2019.

CONSIDERACIONES

Corresponde a este Despacho Judicial determinar si hay lugar a declarar la pérdida automática de competencia para conocer del presente proceso, conforme lo prevé el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012 (*estatuto general procesal*), que dispone:

ARTÍCULO 121. DURACIÓN DEL PROCESO. *Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.*

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congestión, podrá previamente indicar a los jueces de determinados municipios o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado.

Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo.

Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.

*<Inciso CONDICIONALMENTE exequible, aparte tachado INEXEQUIBLE> Será nula **de pleno derecho** la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.*

Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> El vencimiento de los términos a que se refiere este artículo, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales.

PARÁGRAFO. *Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad judicial desplazada.*

Es decir, el mentado artículo dispuso un término puntual de duración de los procesos, tanto en primera como en segunda instancia, esto con el fin de asegurar pronta, cumplida y eficaz solución a los asuntos sometidos al conocimiento de los jueces. No solamente previó el término, sino que, además, señaló una consecuencia específica al incumplimiento de tales términos.

Así las cosas, considera procedente este Servidor judicial hacer un breve reencuentro de las actuaciones surtidas en el proceso *sub examine*, a fin de corroborar si es aplicable o no, la pérdida automática de competencia para conocer del presente proceso, conforme lo prevé el artículo 121 del C.G.P., así:

1. La solicitud de liquidación patrimonial fue presentada el 14 de febrero de 2020, la cual, mediante auto de fecha 10 de marzo de 2020 se declaró la apertura del mismo.
2. El 17 de febrero de 2021, el expediente ingresó al Despacho con solicitud de reconocimiento de personería jurídica y con oficio del Juzgado 17 Circuito de Bogotá. Razón por la cual, mediante auto de la misma fecha, se reconoció personería al abogado Nairobi Angelo Alejo Ariza como apoderado judicial de la acreedora Angela Patricia López Castellanos.

3. En razón a que el liquidador inicialmente designado no se pronunció, ni tomó posesión del cargo, mediante auto fechado 21 de junio del 2021, se relevó y se designó a un nuevo liquidador. Sin embargo, al no tener comunicación por parte del mismo, mediante auto de fecha quince 15 de septiembre de 2021, se requirió por última vez al liquidador.
4. Al no obtenerse la posesión del liquidar antes mencionado, ya que el correo electrónico registrado no recepcionó mensajes, como fue puesto de presente por parte de la secretaria (véase folio 45 del Cuaderno principal), se ordenó relevarlo y se designó a uno nuevo, mediante auto de fecha 2 de mayo de 2022 y se negó la solicitud de desistimiento tácito elevada por el abogado de una de las acreedoras.
5. El 20 de mayo de 2022, el apoderado de la acreedora Ángela Patricia López Castellanos, presentó recurso de reposición y en subsidió de apelación contra el auto que negó su solicitud de desistimiento tácito.
6. Se tuvo comunicación de la liquidadora designada, sobre la imposibilidad de aceptar el cargo.
7. Mediante auto fechado 15 de febrero del 2023, se resolvió el recurso presentado.
8. En atención a la solicitud de control de legalidad al auto anterior, elevada por el apoderado de la parte actora, mediante auto de fecha 20 de abril de 2023, se dejó sin valor y efecto el numeral segundo del mentado auto y se designó a un nuevo liquidador.
9. En razón a que el liquidador designado no se pronunció, ni tomó posesión del cargo, mediante auto fechado 27 de junio del 2023, se relevó y se designó a un nuevo liquidador.

En ese orden de ideas, es preciso traer a colación jurisprudencia relacionada con la pérdida automática de competencia de que trata el artículo 121 del C.G.P. Al respecto, se tiene que mediante la sentencia **STC10758-2018**, la Corte Suprema de Justicia, recordó el deber de velar por el principio de celeridad de la actuación judicial, principio que cobra mucha importancia en el sistema oral, e insta a los jueces a que analicen juiciosamente el asunto y los problemas jurídicos concretos que de él emanan, recordó igualmente el deber de colaboración de las partes para lograr el cometido de un proceso célere, evitando maniobras dilatorias, e hizo alusión al poder disciplinario del juez para evitar tales maniobras.

Por su parte, la Corte Constitucional en **Sentencia T-341/18**, sostuvo que la nulidad era sanable señalando que en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y debido proceso sin dilaciones injustificadas se debían analizar bajo los siguientes supuestos de los cuales la actuación extemporánea del juez dará lugar a pérdida de competencia, según art. 121 del CGP: *(i) Que la pérdida de competencia sea alegada antes de que se profiera sentencia; (ii) Que el incumplimiento del plazo fijado no se encuentre justificado; (iii) Que no se haya prorrogado la competencia por parte de la autoridad judicial a cargo del trámite para resolver la instancia respectiva, de la manera prevista en el inciso quinto del artículo 121 del CGP; (iv) No evidencie un uso desmedido, abusivo o dilatorio de los medios de defensa judicial, (v) Que la sentencia, según corresponda, no se haya proferido en un plazo razonable*

En suma, la Corte Constitucional, sala Plena, en su **sentencia C-443 del 25 de septiembre del 2019**, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez se determinó que la duración del proceso y pérdida de competencia del juez debe ser alegada por una de las partes, a saber:

Conformada la unidad normativa en función de la identidad de contenidos y con el propósito de evitar la inocuidad del fallo judicial, se declarará la exequibilidad condicionada del inciso 2 del artículo 121 del CGP, para aclarar que este es constitucional, en tanto se entienda que la pérdida de la competencia sólo se configura cuando, una vez expirado el plazo legal sin que se haya proferido la providencia que pone fin a la instancia procesal, una de las partes alegue su configuración, sin perjuicio del deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin haberse proferido el auto o sentencia exigida en la ley.

Aunado a lo anterior, precisó nuestro máximo órgano de cierre constitucional que:

La Sala concluye que la calificación de pleno derecho de la nulidad de las actuaciones adelantadas por el juez que pierde la competencia por el vencimiento del término para concluir la respectiva instancia vulnera el derecho a la resolución oportuna de las decisiones judiciales, el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial. Por ello, la Corte declarará la inexecutable de la expresión “de pleno derecho” contenida en el inciso 6 del referido precepto legal.

Es decir, en virtud de la declaratoria de inexecutable por la Corte Constitucional, la nulidad no opera de pleno derecho, la alegación de las partes sobre la pérdida de la competencia y sobre la inminencia de la nulidad debe ocurrir antes de proferirse sentencia, y la nulidad puede ser saneada en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del CGP, de allí que se deba integrar la unidad normativa con el resto del inciso sexto del artículo 121, que contempla la figura de pérdida automática de competencia por vencimiento de los términos legales.

Bajo esas premisas y, en atención a los criterios jurisprudenciales traídos a colación en párrafos que anteceden, es pertinente aludir por parte de este Servidor Judicial que el término previsto en el artículo 121 del C.G.P., se encuentra fenecido sin dictarse la sentencia o providencia de fondo, sin embargo, dicha situación no puede ser imputada solamente al Despacho. Pues tal y como lo indicó la Corte Constitucional en sus pronunciamientos¹, en ocasiones se pueden presentar moras y/o tardanzas judiciales, las cuales pueden estar debidamente justificadas y, no pueden ser imputables al actuar del juez; más bien, al que hacer de los liquidadores designados que no aceptan la designación.

Por lo tanto, es claro para este Juzgador que hay una mora y/o tardanza judicial debidamente justificada, puesto que no ha sido posible pese a la multiplicidad de ocasiones que se designa al liquidador para que acepte el cargo, para el proceso objeto de estudio. Sin embargo, es claro que esta situación no puede ser atribuida al suscrito, máxime, cuando es indispensable para esta clase de procesos que, el liquidador se poseione y realice las cargas procesales previstas en el artículo 564 del C.G del P.

En mérito de lo expuesto, devendrá por parte de esta Sede Judicial, **NEGAR** la solicitud presentada por el apoderado judicial de la acreedora Ángela Patricia López Castellanos. Por lo tanto, este Despacho,

RESUELVE:

NEGAR el incidente de nulidad presentada por el apoderado judicial de la acreedora Ángela Patricia López Castellanos, en virtud de lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS

Juez (2)

CAL

Firmado Por:

¹ sentencia C-443 del 25 de septiembre del 2019, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Jorge Eliecer Ochoa Rojas
Juez
Juzgado Municipal
Civil 046
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **74c92ad9dab5445f462f786eb3e4356c01bf00a01f37b144137216729d68f28a**

Documento generado en 16/02/2024 03:45:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL
Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

RAD: 110014003046-2022-01091.-00.

Previó a resolver la solicitud incoada, por la parte interesada, se le requiere para que indique y allegue a este despacho acta de entrega voluntaria de fecha 01 de mayo de 2023 del vehículo de placas DQM-188, así como el lugar en que fue dejado a disposición el rodante y el inventario respectivo del bien.

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS
Juez

APB

Firmado Por:
Jorge Eliecer Ochoa Rojas
Juez
Juzgado Municipal
Civil 046
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5558474b480954d6cd91dcfa6675b479b30e69cfb91d53faf5d03f811fb404dd**

Documento generado en 16/02/2024 09:46:10 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del Diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

RAD: 110014003046-2023-00220-00

Atendiendo al informe secretarial que antecede, se Rechaza de Plano el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante por improcedente, en atención a lo contenido en el inciso tercero del artículo 90 del Código General del Proceso.

En consecuencia, por secretaria, procédase a contabilizar los términos de subsanación de la demanda, conforme lo previsto en el artículo 118 del C.G.P.

Cumplido lo anterior y una vez ingrese al Despacho, se decidirá sobre las solicitudes visibles a folios 016 y 017 del cuaderno principal

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS

Juez

CAL

Firmado Por:

Jorge Eliecer Ochoa Rojas

Juez

Juzgado Municipal

Civil 046

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f1dc4bcebeec388c18c203ff52024dfbe9b1572c548b01184e88f0de7b700e5**

Documento generado en 16/02/2024 03:45:59 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

RAD: 110014003046-2023-00910-00.

Procede el Juzgado a resolver las objeciones formuladas por los acreedores dentro del trámite de negociación de deudas adelantado por HERNANDO SANTOS VELASCO ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición Asemgas L. P, ello al tenor de lo normado por el artículo 552 del Código General del Proceso.

ANTECEDENTES

El ciudadano HERNANDO SANTOS VELASCO identificado con cedula de ciudadanía No 1.101.202.875, a través de apoderado presentó ante el Centro de Conciliación ASEM GAS L.P., trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, el cual fue aceptado mediante radiado No. 02134 de fecha 21 de junio de 2023.

Como acreedores se citaron para la audiencia de negociación de deudas a los acreedores BANCO BBVA, BANCO DE BOGOTA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO DE OCCIDENTE Y BANCO POPULAR.

El 15 de agosto de 2023 se realizó la audiencia contemplada en el artículo 550 del C.G.P., aplazada para el 23 de agosto de 2023, durante el referido termino, en comunicación del 18 de agosto de 2023, el apoderado del banco popular se opuso a la negociación.

DE LA OBJECION

Ley 1564 de 2012 que comenzó a regir el primero de octubre de 2012 consagra la reglamentación que permite la declaratoria de insolvencia de las personas naturales no comerciantes, mediante el cual el deudor declara su insolvencia y propone fórmulas de pago a sus acreedores, quienes son llamados para que hagan valer sus créditos contra el deudo.

Por su parte la misma norma señala que quien presente objeciones deberá hacerlas presentado el escrito junto con las pruebas que pretenda hacer valer (art. 552 del C.GP (...)).

En cuanto al argumento presentado por el apoderado del Banco Popular sustentada en la mala fe del insolvente para iniciar proceso de insolvencia, en virtud que existe falsedad en la información proporcionada al banco popular y a los demás acreedores al momento de solicitar el crédito al momento da fin de que las entidades financieras no pudieran evidenciar su endeudamiento financiero, y le aprobaran sus créditos; información que tampoco declaro en la solicitud de insolvencia, lo que denota que existe una mala fe por parte de la insolventante que pretende de manera dolosa iniciar proceso de insolvencia de persona natural.

El extremo ejecutante advirtió que se ignora el principio de buena fe,

En punto a resolver sobre la objeción, se memora que el artículo 834 del Código de Comercio establece que *“Se presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o afirme que esta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo”*.

A su vez, el artículo 79 del Código General del Proceso prevé que *“Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. 2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes. 3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos”*

Es bueno anotar, además que el principio constitucional de buena fe hunde sus raíces en la exigencia de aquellos mínimos éticos fundamentales, sin los cuales la convivencia cae en peligro de la disolución y la barbarie.

Dentro de la problemática de la valoración jurídica de la conducta humana, la buena o mala fe con que proceden los individuos es, en principio y según lo tiene enseñado la doctrina, una cuestión de hecho: tal estado es, por su naturaleza, un fenómeno psíquico, vale decir, de índole subjetiva y moral, cuya apreciación necesariamente tiene que hacerse a través de otros hechos, estos sí objetivos, como lo son los rastros o huellas que deja al exteriorizarse así alcanzar resonancia en la órbita del derecho.

Pero, se repite que, la valoración de la buena o mala fe en la conducta de las personas es siempre una cuestión de hecho que, a falta de una prueba directa como lo sería la confesión de la contraparte, generalmente implica el examen de los indicios que deja su exteriorización.

En el caso bajo estudio el extremo demandado no probó como debía hacerlo, la mala fe por parte del demandante al iniciar la presente acción.

Es necesario traer a colación, lo dispuesto en el artículo 164 del C.G.P., que dice: “**NECESIDAD DE LA PRUEBA.** *Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho.*”

A su turno el inciso 1 del artículo 167 menciona: “**CARGA DE LA PRUEBA.** *Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...*”.

Igualmente, llama la atención lo dispuesto en el inciso primero del artículo 552 del C.G.P., que menciona que los objetantes presentarán el escrito de objeción, junto con las pruebas que pretenden hacer valer y como se dijo, brillan por su ausencia por la cual la objeción planteada no será acogida.

Por lo expuesto el Juzgado RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR infundada la OBJECION presentada por el apoderado judicial del BANCO POPULAR por las razones expuestas.

SEGUNDO: En firme esta decisión, devolver las diligencias al CENTRO DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION -ASEMGAS L.P.-

TERCERO; El presente auto no admite recurso alguno, lo anterior con fundamento en el inciso primero del artículo 552 del Código General del proceso.

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS
Juez

APB

Firmado Por:

Jorge Eliecer Ochoa Rojas
Juez
Juzgado Municipal
Civil 046
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **af872a49efe8bb9b02338f311c2047b01bb7ef6b0a192c5af03ab35754487c0b**

Documento generado en 16/02/2024 09:46:03 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL MUNICIPAL

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Auto Notificado en Estado No. 014 del Diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

RAD: 110014003046-2023-01013-00.

Encontrándose el presente asunto para su calificación, se hace imperioso realizar diversas acotaciones para analizar si esta sede judicial cuenta con la competencia para avocar su conocimiento; al respecto:

Teniendo en cuenta que la Ley 1564 de 2012 entró en vigencia en su integridad a partir del 01 de enero de 2016, por lo tanto, el presente asunto se tramitará bajo las reglas de dicha disposición legal.

En el asunto de la referencia, el valor de las pretensiones, se estiman en menos de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cuanto no ascienden la suma de \$46.400.000,00, (*cuantía aplicable al momento de radicación de la demanda, véase acta de reparto obrante a folio 004 del C1*) cuyo trámite corresponde a un proceso de única instancia.

Así las cosas, se observa que el asunto bajo estudio debe ser conocido por el **Juez Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple** y no por este despacho, conforme lo prevé el parágrafo del artículo 17 del C. G del P., quienes además retomaron su competencia según lo dispuesto en el Acuerdo PCSJ 18-11068 del 27 de julio de 2018.

Sumado a lo anterior, en Bogotá fueron creados los Juzgado Civiles de Pequeñas Causas, a quienes corresponde conocer los asuntos de mínima cuantía consagrados en los numerales 1 a 3 del art. 17 del C.G.P.

En virtud de lo anterior, el despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR de plano la presente demanda por competencia, de conformidad con el inciso segundo del artículo 90 del C.G.P.

SEGUNDO: REMITIR la presente demanda junto con sus anexos, a la oficina judicial de reparto para que sea asignado los Juzgados Civiles Municipales de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple. Déjense las constancias correspondientes.

TERCERO: En el evento que el(a) señor(a) Juez que le corresponda conocer no comparta la decisión aquí tomada, desde ya se propone colisión de competencia NEGATIVA.

NOTIFÍQUESE,

JORGE ELIECER OCHOA ROJAS

Juez

Firmado Por:
Jorge Eliecer Ochoa Rojas
Juez
Juzgado Municipal
Civil 046
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **aea0c154d0d0cf12b3b1874f4707b8cd776931b715436c9d03a441d7d3fe13e9**

Documento generado en 16/02/2024 03:45:59 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>